



# *no transar*

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

*¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!*

Año 24 - (3ra. época)

**EDICIÓN ESPECIAL**

22-02-2021

**Por el salario, el trabajo y las condiciones de vida. Contra la inflación, el hambre y el saqueo**

**LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE**



**Hidrovi a: una nueva capitulaci n**

P g.11

**Monopolios y precios en la Argentina**

P g.18

**Docentes: No aflojar la lucha**

P g.22

**Femicidio de  rsula**

P g.34

## Editorial

# Los precios por arriba de los salarios: ¿Hasta cuándo?

Las consecuencias de la pandemia fueron devastadoras a nivel mundial, pero en el caso argentino, cuya economía venía planchada desde hace diez años y en tobogán recesivo los últimos tres, sus efectos se sintieron especialmente. Las idas y venidas respecto a la provisión de las vacunas y el hecho de estar ranqueado dentro de los 12 países con más dificultades incrementaron la incertidumbre frente a la precariedad sanitaria. La cuarentena y el aislamiento produjeron una caída de 10/11% del PBI con la consiguiente desocupación y pérdida de ingresos. Se perdieron 298 mil puestos de trabajo formal. Regresar a los niveles de actividad de 2019 llevará tres años. Según IDESA (Instituto Desarrollo Social Argentino), atento a la proyección oficial el PBI crecerá 5,5% este año, 4,5% el próximo y 3,5% el 2023. Es decir 14% acumulado, con lo cual la disponibilidad de bienes y servicios dentro de 3 años recién alcanzará los niveles de 2019. El plan del gobierno apunta a que el rebote de la economía en 2021 se traduzca en recuperación del salario y el consumo. Con el intento de anclar el precio del dólar como pauta antiinflacionaria, congelar tarifas de servicios públicos, poner

techo a los salarios y acordar con los formadores de precios, se pretende ganar tiempo a la vez de quedarse con la bandera de la unidad nacional. El visto bueno para exceptuar del impuesto a las ganancias a los sueldos hasta \$150.000 brutos mejorará el poder de compra en sectores medios fundamentalmente, a la vez que suavizará las pretensiones en los porcentajes de paritarias en pleno año electoral. Los empresarios ya anticiparon que no podrán impedir su traslado a precios.

El 4% de inflación en diciembre seguido de otro 4% en enero, puso un alerta por el creciente malestar popular, visto que los porcentajes sobre el precio de los alimentos y otros productos esenciales fueron altamente superiores. Por ejemplo el 36,1% de inflación general en 2020 significó 60% en vestimentas y calzados o bien 52% promedio en los aumentos de la carne. La figura del pacto social entre gremialistas y empresarios tomó cuerpo y fue el tema central en las reuniones con el sindicalismo afín, luego con los empresarios aplaudidores y también con los referentes de la Mesa de Enla-



ce, transitoriamente satisfechos ante el compromiso de no subir las retenciones. En ese marco la insistencia para que los aumentos paritarios giren alrededor del 29% presupuestado, afirmó en los Gordos de la CGT el chamuyo de que no aceptan techos, cuando en realidad el verdadero techo lo pone la inflación real, cuyo pronóstico la gran mayoría de las consultoras la ubican entre el 40/50%. De tal forma que no solo no se intenta reclamar el 23% de salario real perdido en los últimos años sino que se agranda dicho diferencial y por lo tanto el motor de la demanda nunca será el salario ni el consumo como asevera el ministro. Se agrega además que la caída salarial en el trabajo informal (próximo al 50% entre cuentapropistas y en negro) fue de 34%. Sin protección gremial ni licencia alguna se institucionaliza la precarización y la desigualdad entre los trabajadores.

## **El techo del endeudamiento**

Hay que recordar además que en 2020 se firmó el acuerdo con los bonistas, elogiado por el establishment, mediante el cual toda acumulación de divisas sería destinada al pago de la deuda. Por otro lado están los condicionantes del FMI, sin fecha cierta de cierre pero con avanzadas coincidencias respecto al reintegro de los U\$S 44.000 millones aún pendientes. El apremio existe no tanto por recomponer los desequilibrios sino por empezar a capturar los recursos para cumplir con la banca acreedora. Quienes representan al oficialismo

como referentes gremiales, sociales o de pymes, deben saber que la torta ya está distribuida y que nace muerta toda protesta que puedan insinuar sin sacar los pies del plato. Al menos desde los intereses del conjunto de la clase trabajadora, aunque algunos gremios con mayor capacidad de presión puedan lograr aumento iguales o cercanos al índice inflacionario. Otra vez la cruda realidad de que sin reformas que modifiquen las estructuras monopólicas del poder y sin cambios en la matriz productiva que generen mayores recursos, todo lo que se pueda conseguir estará limitado por los índices actuales de pobreza o por la resignación miserable del 75% de los trabajadores cuyos ingresos están por debajo de los \$56.000 equivalentes a la Canasta Básica de enero. Más que redistribuir la riqueza, con esta política lo que se logra es contener y emparejar la pobreza.

En el tema de los precios, cuando la economía está concentrada las condiciones las ponen quienes manejan el mercado, por lo cual aquel viejo criterio liberal de que se regula por la oferta y la demanda, desapareció desde el mismo momento que la superconcentración económica y financiera se hizo realidad. ¿Por qué los dueños de las principales ramas de la actividad deberían absorber la crisis cuando históricamente la descargan sobre el pueblo? Las patronales no negocian con representantes obreros genuinos que peleen por su clase sino con jerarcas sindicales; ni tampoco se enfrentan un gobierno expropiador o al menos dispuesto a castigar penalmente la especulación.

Las denuncias recientes por el desabastecimiento en algunas empresas de alimentación están bien orientadas pero son insuficientes. Los acuerdos de precios y salarios podrán atenuar transitoriamente la puja en aras de bajar la inflación, pero en general son políticas distractoras y perjudiciales para los trabajadores.

Llamó la atención en algunos medios los aplausos que los grupos empresarios - Arcor, Techint, Aluar, Copal, entre otros- brindaron en la reunión con el ministro Guzmán, por el solo hecho de sostener que la inflación obedece a razones macroeconómicas. Les vino bien para sacarse el lazo de la especulación y los sobreprecios. El ministro, discípulo del asesor del FMI Joseph Stiglitz, está muy lejos de suponer una economía que no sea regida por los grandes capitales. Supone que la inflación irá descendiendo un 5% cada año por lo cual el 29% presupuestado actualmente, recién dentro de 6 años en el mejor de los casos, debería aproximarse a cero. Sería un festejo si no fuera por el dolor en vida y las consecuencias sociales que genera la pobreza. No sabe cuánto valdrá el dólar la semana que viene ni el pan en la próxima, pero asegura que pondrá en caja la inflación como si fuera una cuestión de resignación o de simple azar. En todo caso tal aseveración deberá cotejarla con la vicepresidenta que pidió alinear los salarios con precios y tarifas. El aumento en los combustibles 12% en lo que va del año, del transporte, impuestos provinciales, y sobre todo el pago de intereses (Leliq, pases y moras) que orilló los \$ 698.000 mi-

liones, contrasta con la reducción de gastos pretendida, pero no con la política de precios ni de los ajustes a implementarse.

## **Recuerdos del difunto**

Fueron diversos los planes y los partidos gobernantes que apelaron a los programas antiinflacionarios con acuerdos de precios y salarios. Al final tales planes no sobrevivieron y los que salieron perdiendo siempre fue la clase trabajadora. En la economía de la concentración monopólica, todos los intentos por regular con precios máximos o cuidados o con listas de control, incluidos batallones de militantes controlando góndolas, siempre fracasaron. De los últimos 70 años, solo 13 tuvieron inflación de un dígito. El resto promediaron el 65% anual con tres hiperinflaciones intercaladas. El período de estabilidad más prolongado fueron los 8 años de 1993 a 2001, con el plan de convertibilidad, que tuvo como telón de fondo las relaciones carnales con EEUU establecidas por Menem-Cavallo. Fue el golpe más mortífero producido en democracia a las fuerzas productivas nacionales, con la privatización de las empresas estatales al mejor postor, entrega de recursos estratégicos y miles de obreros cesanteados. Cuando el sueño de 1 peso=1 dólar terminó, el país voló por los aires al impulso de la insurrección popular de 2001. Los argumentos oportunistas del peronismo que consagró por dos veces a Carlos Menem, no pueden justificarse en las internas propias del movimiento justicialista como tampoco con que fueron las reglas neoli-

berales que predominaban en el mundo capitalista. Desde entonces la precarización laboral tanto como la pérdida sustancial de capacidad decisoria del país quedaron institucionalizadas, constituyendo junto con los 4 años de Mauricio Macri el período de saqueo y desnacionalización más notorio desde el retorno de la democracia. No por difunto, ni frente a tantas lágrimas de cocodrilo derramadas por muchos funcionarios y legisladores en el velatorio de Menem, se puede omitir ligeramente la destrucción conferida al pueblo y al país, o justificarlos como “errores de la política”. Queda saber dónde está parado el presidente Fernández cuando se pone en componedor de la grieta, o trata en llamados a la unidad nacional de purificar los grupos conspirativos, o cede permanentemente ante las multinacionales en los aprietes sobre la deuda e YPF, o bien con el decreto 949/20 que profundiza la entrega de la Hidrovía del Paraná a las cereales.

El panorama no está despejado, visto el desfasaje en el tipo de cambio, la alta inflación, la incertidumbre de las vacunas y sobre todo la desocupación y pobreza con su conflictividad en ciernes. La formación del Consejo Económico Social presidido por un neoliberal como Béliz, es una pantalla más de abrir el juego sin cambiar nada y sin que los problemas centrales de la emergencia sean parte de la agenda.

## **No es solo la pobreza**

La acelerada escalada en los precios desacom-

da violentamente la vida de los trabajadores. La emergencia social y alimentaria corren siempre desde atrás igual que los salarios. Está herida la perspectiva de bienestar así como la credibilidad en el gobierno elegido. No se puede gobernar solo sobre el fracaso de la gestión anterior sin cambios sustanciales en el rumbo y sin disponer que los recursos se destinen a cubrir la deuda interna.

Al destacado rol que juegan los trabajadores de la salud conjuntamente con las exigencias salariales, se suman los planteos de los docentes cuyo inicio de clases presenciales abrió un extenso debate. A las distintas modalidades que irán definiendo los propios docentes junto a la comunidad, el reclamo de aumento que duplique los \$27.500 de diciembre es lo mínimo para aproximarse al valor que tiene la canasta básica de enero. Por lo cual el 29/30% que se anunció en la reunión con el ministro Trotta debe rechazarse. Ese tope desnuda la complicidad



de la dirigencia para que la crisis la sigan pagando brutalmente los trabajadores. Otros estatales también van por sus reclamos, municipales, choferes, guardavidas, curtidores, etc. A la par de la impresionante movilización nacional del frente piquetero el 18 febrero, que en la CABA paralizó la ciudad desde Puente Pueyrredón a 9 de Julio y Belgrano. En otros planos, el rechazo a las mega-mineras en Chubut, tanto como la condena y movilizaciones contra los femicidios en Rojas y en el país, van conformando una insatisfacción que no se puede ignorar.

Sobre ello hay que discutir una perspectiva. Si se pretende ganar elecciones para seguir con lo mismo no tiene sentido. Por ende la necesidad de abrir un nuevo rumbo. Romper con la política de contención y resignación del Frente de Todos. Afianzar una política de unidad antiimperialista que no pague la deuda. Avanzar en el control de los principales resortes de la economía, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Abrir cauce al programa de nacionalizaciones de los recursos estratégicos. Es la única política posible en el sentido de cambios de fondo, con los trabajadores como protagonistas centrales de los mismos.

**Andrés Zamponi**

# Hidroavía: una nueva capitulación

*La Hidroavía Paraguay-Paraná es una vía de comunicación fluvial compuesta por los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y de la Plata, que integra el comercio de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina con el mundo. En 2020, Alberto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal Hidroavía Sociedad del Estado integrada por las siete provincias costeras y el Estado nacional, como iniciativa política frente al próximo vencimiento -en abril- de la concesión a la empresa Hidroavía S.A. (integrada por las firmas Jan de Nul de Bélgica y EMEPA de Argentina) que fuera otorgada en 1995 por Carlos Menem y prorrogada en numerosas ocasiones.*

El vencimiento de la concesión podría significar el fin del comercio sin control y regulación en la Hidroavía, siempre que haya una fuerte voluntad política para enfrentarse a los intereses del complejo agro-industrial y los capitales multinacionales. No obstante, en sintonía con los amagues en la expropiación de Vicentín, las retenciones y el cupo a las exportaciones de maíz, el gobierno del Frente de Todos retrocedió nuevamente sobre sus pasos. En noviembre, el Decreto 949/20 autorizó un nuevo proceso de licitación a cargo del Ministerio de Transporte (léase, sin mediación del Congreso

o cualquier forma de participación e intervención popular) para “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema, señalización, dragado y mantenimiento” de la Hidrovía, quedando suspendida la creación de la Administradora Federal.

Para comprender la importancia de los intereses en juego hay que caracterizar a la Hidrovía. Ésta posee 3.400 km. de ríos desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta la desembocadura del Plata y un 50% de la misma se emplaza sobre territorio argentino,



siendo la principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera nacional: por ella sale al mundo prácticamente toda la producción granaria del Cono Sur. Anualmente, transitan 4.500 embarcaciones que trasladan 125 millones de toneladas de granos, derivados y otras materias primas -un 75% de las exportaciones totales del país. El sistema cuenta con 105 terminales portuarias en cinco países, de las cuales 29 se asientan en los alrededores de Rosario, en sólo 65 km de costa, junto a un sinnúmero de fábricas de la industria derivada de la producción agropecuaria (aceite, biocombustible, pellet y expeler, y otros subproductos).

En síntesis, se trata de una verdadera “autopista de agua” cuyo origen histórico está enmarcado en el fuerte impulso a los proyectos de mega-infraestructura energética, de comunicaciones y transporte que vivió América Latina en décadas recientes de la mano del capital extranjero. Ya desde 1998 diversas instituciones financieras internacionales como el BID y la CAF hacían lobby por la “integración regional” a través de la unificación de los 50.000 km de vías navegables de las tres grandes cuencas latinoamericanas (del Plata, Orinoco, Amazonas), en el marco del Plan IIRSA. La Hidrovía fue proyectada y ejecutada como parte de una “integración” que respondía a la demanda de los grandes productores agropecuarios, las cerealeiras y las empresas multinacionales que dominan los negocios extractivistas: ampliar y modernizar la infraestructura para abaratar los costos de la producción y el transporte, favorecer el desarrollo de

inversiones extranjeras en toda la cadena de valor y profundizar un modelo de extracción e industrialización de materias primas.

En ese sentido, el notable crecimiento de la infraestructura y las operaciones comerciales de la Hidrovía se relacionan con la consolidación del modelo sojero – agroexportador, cuyos cimientos se plantaron en los años '90 con la autorización de las semillas transgénicas, la protección de las patentes, la siembra directa y el uso de agroquímicos. No casualmente en el mismo período se expandió la frontera agropecuaria a 40 millones de hectáreas sembradas y casi 150 millones de toneladas cosechadas y el uso de agrotóxicos a unas 5 millones de toneladas (cifras anuales). El proceso fue orientado, desde sus inicios, en dirección a la exportación y en beneficio de los grupos empresariales que lideran el rubro, sin considerar las necesidades de alimentación locales y las potenciales consecuencias en cuanto a la concentración y extranjerización económicas, la salud de la población y la destrucción ambiental. Sin ir más lejos, Argentina está entre los 10 países con mayor superficie apta para uso agrícola y puede proveer alimentos a unas 450 millones de personas en todo el mundo, pero el 50% de su población no llega a los ingresos mensuales necesarios para el sustento básico.

Contra toda mitología liberal, las inversiones ligadas a la Hidrovía dejan pocas riquezas “en terreno”, pues tienen una bajísima tasa de puestos de trabajo sobre dólares facturados. En cambio, sí

promueven la concentración y la pérdida de diversidad productiva, además de tener un importante impacto ambiental en toda la cuenca: desde los efectos de los agrotóxicos en agua y suelos, la alteración de los humedales y las sequías e inundaciones, hasta el depósito de sedimentos tóxicos en el Paraná. En años recientes, organizaciones ambientales y ecologistas han luchado fuertemente contra la instalación de puertos y terminales en zonas protegidas, como el Pantanal brasileiro.

Por todo lo anterior, el decreto 949/20 es básicamente un proyecto de las multinacionales dominantes en el rubro agroexportador (Dreyfus, Cargill, Bunge, COFCO, ADM, AGD, Vicentín) para mantener el control global de la cadena de producción y exportación cerealera, con todas las implicancias ya señaladas.

El tema se agrava si consideramos que, dado que las concesiones vencen, no tendría ningún costo fiscal para el Estado retomar el control, manejo y explotación de la Hidrovía: podría obtener ganancias a partir de su administración y tener un control más eficiente de la circulación de las exportaciones e importaciones, con el consiguiente saneamiento impositivo.

Igual que Vicentín, el caso de la Hidrovía destapa una situación generalizada. El comercio por ríos, vías navegables y puertos está mayormente en manos privadas y monopolizado por grandes empresas (de hecho, el 98% de los barcos de la Hidrovía son extranjeros), mientras que el Estado no cuenta con una flota mercante propia (fluvial ni ma-

rítima) y desconoce cuánto se exporta y cómo: la única fuente de información son las declaraciones juradas de los propios empresarios. Es un secreto a voces que del Paraguay salen barcazas con pocos containers, pero llegan a la altura de Buenos Aires con carga completa -sin haber declarado nada. Como éste, las empresas cuentan con múltiples mecanismos para triangular operaciones comerciales y financieras esquivando controles y regulaciones, evadiendo impuestos y fugando capitales.

Otro aspecto del problema es la demora –a 6 años después de su planificación- de las obras en el Canal Magdalena, una vía directa desde el océano al puerto de Buenos Aires y a toda la Hidrovía. El dragado de Magdalena evitaría el uso del Canal Punta Indio y la escala necesaria en el Puerto de Montevideo, ambos concesionados a manos privadas: paradójicamente, hoy la Argentina debe pedir permiso a las empresas concesionarias de los canales para ingresar o sacar productos de su propio territorio, con el consabido incremento de los costos y la pérdida de soberanía.

En síntesis, la situación en torno a la Hidrovía es el combo perfecto para la pérdida del control y la regulación sobre el comercio exterior.

Para colmo, el sector agroexportador apenas se vio afectado por la pandemia, la sequía y la bajante del Paraná, pues siguieron operando durante todo el período, incluso con producción récord y un alza internacional de precios -a partir de mayo 2020. Aun así, el lobby sectorial presiona contra

cualquier medida contraria a sus intereses (retenciones, cupos, expropiaciones) y el gobierno retrocede porque decidió -tras pincharse el globo de Vaca Muerta- atar su proyecto económico a las exportaciones de la agroindustria derivada de las oleaginosas, conformando una alianza estratégica con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que agrupa a las empresas del rubro. Toda una definición de los intereses de clase que defienden Alberto Fernández y el Frente de Todos. Por el contrario, la defensa de los intereses populares y la perspectiva de una recuperación económica vuelven necesaria la derogación del decreto 949/20 y la suspensión de la licitación, así como el control estatal inmediato de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las vías navegables, los puertos y el comercio exterior en su conjunto, que deben ser nacionalizados y puestos bajo control de los trabajadores en el marco de un plan de desarrollo económico basado en la nacionalización de todos los recursos estratégicos y el sistema bancario y el no pago de la deuda externa ilegítima y usurera.

**David Paz**

# Monopolios y precios en la Argentina

*El comercio exterior se transformó en el factor determinante de la producción, comercialización y provisión de, entre otras cosas, los alimentos.*

Veamos, por ejemplo, el problema de la carne. En el año 2019 se produjeron en el país 3.122.000 toneladas de carne vacuna, consignándose al mercado interno 2.290.000 toneladas -esto representa una merma del 8,5% con respecto del año anterior- y exportándose 832.000 toneladas. Si bien la producción de carne subió un 47,9% en 2019, el consumo del producto en nuestro país bajó un 9,4%, debido a los altos precios y los bajos salarios. Veinte grandes frigoríficos concentran el 55% de las exportaciones, entre ellos Gorina, Minerva, Arre Beef, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana (China), Friar (Vicentin), Marfrig, Exportadora de la Patagonia (Grupo Anónima, Marcos Peña Braun), Coto, Quickfood (Brasileña), y diez más. En el año 2018, estos frigoríficos facturaron U\$S 3.104,5 millones por exportación de carnes. Otro tanto ocurre con las grandes exportadoras de cereales. En el 2019 la producción de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales ascendió a 97,6 millones de toneladas, siendo exportados 66,6 millones de trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, arroz, maní, más sus harinas y aceites derivados,

junto con algunas legumbres. Ese año fue cosecha récord, y las cerealeras acumularon una ganancia neta de U\$S 23.719,5 millones (17,3% más que el año anterior). Las primeras en el ránking son: Cofco (China), Cargill, ADM, Bunge, Aceitera General Deheza (AGD), Vicentín, Oleaginosa Moreno, Louis DreyfusCia, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, Amaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y Maltería Pampa. El mismo año, Cofco, Bunge y Cargill, las tres multinacionales, lideraron la venta de trigo al exterior.

Todas estas empresas, frigoríficos y cerealeras, son formadoras de precios en el mercado interno, ya que la competencia -piedra basal del capitalismo primitivo- ha sido aplastada por el monopolio. Tomemos el ejemplo de Molinos Río De La Plata. Esta empresa fue comprada al grupo Bunge y Born (hoy Bunge en Argentina) por el no menos poderoso holding PerezCompanc. La empresa produce y es líder en el mercado, las siguientes marcas de aceites, rebozadores, fideos y harinas: Granja del sol, Exquisita, Lucchetti, Matarazo, Preferido, Vitina, Cocinero, Lira, Blancaflor, Don Vicente, Minerva, Gallo, Arlistán, Nieto Senetiner, y la yerba Nobleza Gaucha. Otro tanto ocurre con la leche. Hay 15.000 tambos en el país, pero el grupo Mastellone concentra más del 60% de las ventas de leche fresca. Y ni hablar de las gaseosas, aguas saborizadas y frutales. Dos empresas, Coca Cola y Pepsi, se sacan los ojos por controlar el mercado, pero entre las dos concentran el 98,3% de las ventas. Coca Cola marcha levemente a la cabeza,

con sus productos altamente diversificados. Coca Cola, Powerade, Sprite, Acuario, Crush, Bonaqua, Fanta, Cepita, Ades, Kin, Hi-C y Schweppes; integran la primera línea en la batalla por el control del mercado de gaseosas.

Veamos a continuación el siguiente cuadro:

Producto	Empresas que lo monopolizan	Porcentaje
Aceites	3	90,5%
Gaseosas	2	98,3%
Aguas Minerales	3	100%
Jugos en polvo	2	89,6%
Azúcar	3	100%
Cerveza	2	98,2%
Leche	1	69,5%
Yogures	1	80%
Embutidos	1	83%
Harinas	2	82,1%
Fideos	1	79,4%
Mayonesas	2	97,8%
Caldos	1	90,6%
Dentífricos	1	84,7%
Desodorantes	1	84,5%
Jabones	1	82,7%
Pañales	2	95,6%

A esto debemos agregar que seis cadenas de supermercados (Carrefour, Cencosud, Coto, La armonía, NexusPartners, Wallmart y Casino) concentran el 89% de las ventas de alimentos (cuatro

son extranjeras).

Todos estos grupos son los grandes responsables de la suba desmedida de los precios de la canasta familiar; y solo su confiscación y estatización (de frigoríficos, cerealeras y supermercados), a lo cual debe agregarse la confiscación del latifundio, sobre todo extranjero, podrán detener el proceso inflacionario. Fijando cupos de exportación que privilegien el abastecimiento del mercado interno, regulado por el Estado, en su proceso de soberanía alimentaria que proteja el ecosistema y garantice una adecuada alimentación para nuestro pueblo, incorporando a los millones que hoy pasan hambre o están mal alimentados.

En un país que fabrica alimentos para cuatrocientos millones, un solo niño con hambre, una sola familia revolviendo la basura, es un crimen de lesa humanidad que debe ser castigado.

Solo una nueva democracia, surgida de un poder popular, podrá llevar adelante las grandes tareas que la realidad impone y nuestro pueblo necesita.

**Claudio Gallo**

CABA

# Docentes: no aflojar la lucha

*Finalmente, la semana pasada comenzaron las clases en la Ciudad, parcialmente y con no pocas complicaciones.*

Entre el 10 y el 12 de febrero empezaron el nivel inicial, 1°, 2° y 3° grado de la primaria y 1° año de la secundaria. Al cierre de esta edición, se irán incorporando el resto de los grados de primarias, 2° año de la secundaria y en los primeros días de marzo, toda la secundaria.

Esto según el cronograma impulsado por el gobierno porteño. La realidad es que apenas llegaron a preparar el escenario para el comienzo de los cursos citados, que son pocos en relación al conjunto de la cursada. Nadie tiene muy claro qué va a pasar de acá a 15 días.

El pomposo “todos los chicos todos los días” que promovieron Larreta y Acuña fue bajado a la realidad por los directivos de las escuelas: en la mayoría de los establecimientos, la cursada será bimodal, alternando presencialidad y virtualidad. Es apenas una cuota de sensatez para una vuelta que de cuidada no tiene nada.

## Del protocolo a la realidad

“Lo importante es que se cumplan los protocolos”,

repitió una y otra vez el ministro de Nación Trotta, en la conferencia de prensa con Acuña. Con este aval, el ministerio de Educación de Ciudad elaboró un protocolo que choca de lleno con las posibilidades reales de las escuelas. La relativamente poca movilización de estudiantes y docentes que significó la primera tanda de “vuelta a las aulas” pudo ser absorbida con cierta prolijidad por las escuelas cuyos edificios están en mejores condiciones que la media. La realidad es que en la inmensa mayoría de las escuelas el “metro y medio de distancia” entre alumnos dentro del aula es impracticable aun dividiendo en dos los cursos. Luego está el problema de la ventilación cruzada y de la infraestructura general de los edificios. Los elementos de limpieza llegaron a algunas escuelas y a otras no. No hace falta decir que la “prioridad en el transporte público” fue solo un comentario de mal gusto, y en el horario pico los colectivos colapsaron como lo hacían antes de la pandemia. En este marco, y aun con poca gente circulando en las escuelas, los casos positivos de Covid se multiplicaron por toda la CABA. El protocolo bajado por Ciudad con anuencia de Nación, en definitiva, no es otra cosa que una trampa para forzar a toda costa este regreso improvisado a las aulas.

El gobierno delegó en cada conducción escolar la elaboración de un cronograma de clases. Eso volcó el problema sobre escuelas con realidades sumamente dispares. Colaboró con este cuadro la línea adoptada por la conducción Celeste de UTE, cuyo “plan de lucha” consta de denuncias y de re-

comendar que se labren actas cada vez que no se cumple con el protocolo. Es decir, diluir el golpe contra el gobierno de la Ciudad, concentrando en cada escuela desde un punto de vista puramente legalista, dejando a los docentes e incluso a sus delegados la responsabilidad por las medidas a tomar. La conducta del sindicato mayoritario de no lanzar una medida de fuerza que unifique la pelea de la docencia de la Ciudad, repercutió entre los trabajadores en una bronca indisimulada hacia su conducción. Así paga UTE su alineamiento incondicional con el gobierno nacional, que recogió el guante de “la prioridad son los chicos” que le tiró el macrismo.

En ese marco, el paro convocado por Ademys tuvo la virtud de enfocar correctamente el blanco de la pelea. La actividad del combativismo, confluyente con las bases celestes con reservas, protagonizaron las peleas más visibles de la semana, como se dieron en algunas escuelas de los barrios del sur o en el polo Mugica, entre otras, además de una concentración en el ministerio de Educación.

A este cuadro se suma la reunión de la paritaria nacional, realizada la semana pasada. En ella, Trotta y los líderes de los sindicatos nacionales tomaron al pie de la letra el libreto del ministro Guzmán, en eso de que los salarios le tienen que ganar a la inflación, que sería este año del 29%. Ese pronóstico lleno de optimismo es el que se toma para reclamar un aumento en torno al 30%; una verdadera capitulación siendo que en enero la suba de precios fue del 4%.

En los próximos días, entonces, van a confluír la “vuelta escalonada” y la paritaria, es decir, los problemas de las condiciones de trabajo y del salario. Esto en el marco de que la “vuelta a las aulas” es hoy por hoy un problema político de primer orden. Este es el contexto para organizar la bronca que se manifiesta por abajo y llevarla a medidas de lucha más elevadas. Seguir dándole impulso a las asambleas en cada escuela, apoyándose en los delegados o superándolos ahí en donde sean un obstáculo: el famoso argumento de que “somos pocos” es una manera de allanarle el camino al larretismo. Es momento de que surjan referentes combativos que orienten la pelea. En este sentido, la denuncia de los incumplimientos del protocolo ayudan si son un vehículo de organización y de acción concreta, es decir, para motorizar la movilización y las asambleas. No deben ser los docentes los encargados de velar por una normativa escrita para sojuzgarlos. A su vez, tampoco se trata de que docentes aislados dejen constancia de sus condiciones laborales, sin que eso redunde en medidas colectivas.

En ese camino, ir rompiendo el aislamiento en que se encuentra cada escuela sumida en sus condiciones, para ir confluyendo con las demás instituciones del barrio, distrito o región, además de tender lazos con las familias ahí en donde sea propicio, en camino de darle forma a un plan de lucha que golpee a Larreta y su ministra Acuña.

**Facundo Palacios**

# Se realizó la reunión nacional de la mesa CUBa-MTR

El 9 febrero se reunió la Mesa nacional de la CUBa-MTR con activa e importante participación de todas las regionales. Fue parte del evento el MIDO, la organización hermana con la que se viene recorriendo los barrios y las calles. Sirvió de base un documento sobre la situación política, el despliegue de las movilizaciones y la organización de los barrios en tiempos de pandemia. También se actualizaron los principios fundacionales de la organización. Los testimonios de los delegados ilustraron las diferentes realidades, frentes y alianzas donde lo que unifica son las necesidades elementales de vida y la movilización como método. Con un clima entusiasta se destacó el crecimiento en las nuevas regionales del NOA, Santiago del Estero, Entre Ríos, Rosario, CABA, Chaco y pcia. de Buenos Aires.

Reproducimos algunos párrafos destacados del documento trabajado:

*“El gobierno del Frente de Todos prometió justicia social y castigar a los responsables del saqueo ocasionado por el macrismo, pero en lugar de destinar los recursos al mejoramiento de vida del pueblo decidió pagar a los bonistas y banqueros una deuda ilegítima que los trabajadores no contrajeron... Mucho bla bla pero en los hechos la inflación, las subas de precios, los despidos y la falta de oportu-*

nidades, son consecuencia de las políticas aplicadas donde la crisis otra vez se descarga sobre los que menos tienen....Entendemos las dificultades generadas por la pandemia, justamente porque el mayor desamparo ocurre en los territorios y ante la precariedad son allí los mayores contagios y muertes. Pero también allí está la solidaridad concreta y al momento de mitigar el hambre compartir necesidades, organizando ollas, rechazando la persecución a los jóvenes y sobre todo las matoneadas represivas con la que se pretende acallar los reclamos.”

“Hay que considerar que el gobierno trata de contener a las organizaciones que no responden al Frente de Todos, entre los cuales el Frente de Lucha Piquetero del cual formamos parte, es el más confrontativo. Existen otras organizaciones con las cuales, según las circunstancias, debemos confluir en las demandas y en otras cuestiones como la denuncia al FMI, la exigencia de un techo para todos, condena a las violaciones de los derechos humanos... A 'caballo regalado no se le miran los dientes' dice el dicho popular. Pero los programas sociales (planes), emprendimientos u otros no vinieron regalados por gobernadores o funcionarios nacionales. Se los consiguió con muchas luchas, sacrificios, y sangre de compañeros que perdieron la vida reclamando trabajo digno y una sociedad más justa. Los compañeros deben saber que la Coordinadora Barrial es de todos, que tiene una línea, un programa a defender y sostener”.

“La Coordinadora es una organización política so-

*cial, nació reclamando trabajo genuino consciente a su vez de la necesidad de un cambio revolucionario como salida al país donde la política se asuma como un servicio al pueblo y no como una ventaja para que una casta política se enriquezca ... Se abre un largo camino porque ningún gobierno está dispuesto a hacer las reformas estructurales y romper con la dependencia de las multinacionales, única forma de lograr un país libre, equitativo y dueño de sus propios recursos... Todo lo hacemos bajo la concepción de que 'la única lucha que se pierde es la que se abandona' y nosotros no hemos nacido para abandonar ni dejar de pelear... Todos somos necesarios, pero la participación de los jóvenes del territorio es clave en nuestra estructura. Hay que construir una fuerza callejera con formación política fuerte y solidaria, con disciplina y perspectivas laborales, dotada de una autodefensa compuesta no solo por jóvenes predispuestos a mantener de pie nuestras banderas, sino que sea también vanguardia en la lucha del pueblo."*

Con dicho espíritu y motivados por la consigna "todo el año será diciembre" los compañeros protagonizaron la jornada del 18 convocada por el Frente de Lucha piquetero, de enorme envergadura y de suma importancia política. Próximo a concretar el Plenario del 26 en Parque Lezama y definir un plan de lucha que se corresponda con la coyuntura y actúe como convocante y motivador a su vez de la unidad y confluencia con el resto de los trabajadores.

**Elbio Rojas**

**Córdoba**

# **No a la judicialización de 27 estudiantes de la UNC**

En los últimos días, el fiscal de la causa contra los estudiantes de la UNC por las tomas del 2018, solicitó el rechazo de las apelaciones realizadas y la confirmación de la elevación a juicio de los estudiantes, a quienes se acusa del delito de “usurpación con despojo”. Ahora la decisión esta en manos del Juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quién fue el encargado de llevar la causa desde el primer momento.

Rechazamos la elevación a juicio de los estudiantes y exigimos el inmediato cierre de la causa. Fuimos miles quienes participamos de la Rebelión Educativa en defensa de la educación pública y contra el acuerdo con el FMI. Su justeza se plasmó en movilizaciones masivas y en tomas de facultades por todo el país. La protesta es una libertad democrática que no vamos a negociar y es un derecho del pueblo ante los planes de hambre y miseria.

**¡Cierre de la causa YA!**

**¡Basta de perseguir a los que luchan!**

# Movimiento estudiantil: crecer desde la política

*En la mayoría de las Universidades Nacionales ya comenzaron las actividades de este 2021. Al igual que en el resto de los niveles educativos, el debate central es sobre la modalidad de las clases durante el año. En los primeros días de febrero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya tomó postura: durante el primer semestre se mantendrá, en general, la modalidad virtual y se comenzará un retorno paulatino a la presencialidad, haciendo hincapié en aquellas áreas con actividades prácticas.*

Ni una mención sobre cómo se garantizarían las condiciones de salubridad en aquellas facultades con cursadas masivas, ni mucho menos de dónde saldrán los recursos necesarios para el cumplimiento de los protocolos. En esa parte, al igual que el ministro Trotta, se desligan de toda responsabilidad y dejan que cada universidad decida cómo seguir. Los rectorados a su vez, hacen lo mismo y delegan la decisión en los decanatos de las facultades. Se sigue pasando la pelota y termina recayendo sobre los equipos de cátedra, armar propuestas para poder pensar un esquema de clases presenciales y virtuales. Nadie quiere pagar los platos rotos y, aprovechando la autonomía universitaria, ocultan la falta de recursos y un plan que

pueda garantizar la cursada y la salud de quienes están en el sistema universitario.

Ahora bien, desde las organizaciones del movimiento estudiantil hace falta hacer un balance de lo que viene pasando. En primer lugar, la virtualidad de hecho impuso un régimen en donde se vuelve difuso hablar del “movimiento estudiantil” como sujeto. En este último año, se avanzó con un esquema de aislamiento, en donde se impuso que cada estudiante resuelva de manera individual las propias falencias del sistema universitario para garantizar la educación pública. La política de arriba fue abiertamente direccionada a romper los lazos entre estudiantes, a tal punto que tenemos suerte si se conoce con quién se está cursando. A esta situación se llegó con la complicidad de las conducciones de las Federaciones y Centros de Estudiantes, que en ningún momento hicieron algo para organizar al estudiantado y se centraron en incrementar su rol de administradores de la miseria. En este sentido, hay que tener cuidado con las afirmaciones del CIN sobre que “la virtualidad llegó para quedarse” más allá de la pandemia. Detrás de eso, están los planes educativos de los Organismos Internacionales de Crédito que, además de imponer la desarticulación de la organización sindical y de la estudiantil, viene a profundizar la mercantilización de la educación pública.

En este contexto, es de resaltar los enormes esfuerzos para intentar llegar al estudiantado y no aislarse de la masa. Más si tenemos en cuenta que, como lo demuestra la propia lucha de clases

en nuestro país, el movimiento estudiantil es un aliado fundamental de la clase obrera en la lucha por el poder. También sigue vigente la lectura de que, ante la falta de cursada presencial, las reivindicaciones específicas -justas, urgentes y necesarias- están en un segundo orden de prioridad. Esto último se da por una cuestión objetiva: los principales problemas de quienes estudiamos en la universidad, son los mismos que los del resto del pueblo. Está en la crisis económica que continúa agudizándose y golpeando a los bolsillos obreros y populares. Por eso la necesidad de reforzar que los estudiantes somos parte de esa juventud a la que se le niega el trabajo genuino, el poder llegar a fin de mes e incluso poder proyectar un futuro. Con esta perspectiva, el desafío de este 2021 pasa por poder llegar y organizar a los estudiantes desde la política. Nucleando el descontento por las condiciones de vida en general y apuntando directamente a la salida inmediata: el no pago de la deuda externa. De allí la necesidad de armar un polo de estudiantes que, desde el antiimperialismo, aporte a generar propaganda, insumos y debates sobre por dónde viene una salida popular a la crisis. En ese sentido, la Autoconvocatoria por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda, es un buen espacio para propiciar y desplegar esta política.

**Martina Bas**

# Femicidio de Úrsula: el rol de la fuerza policial en la violencia machista

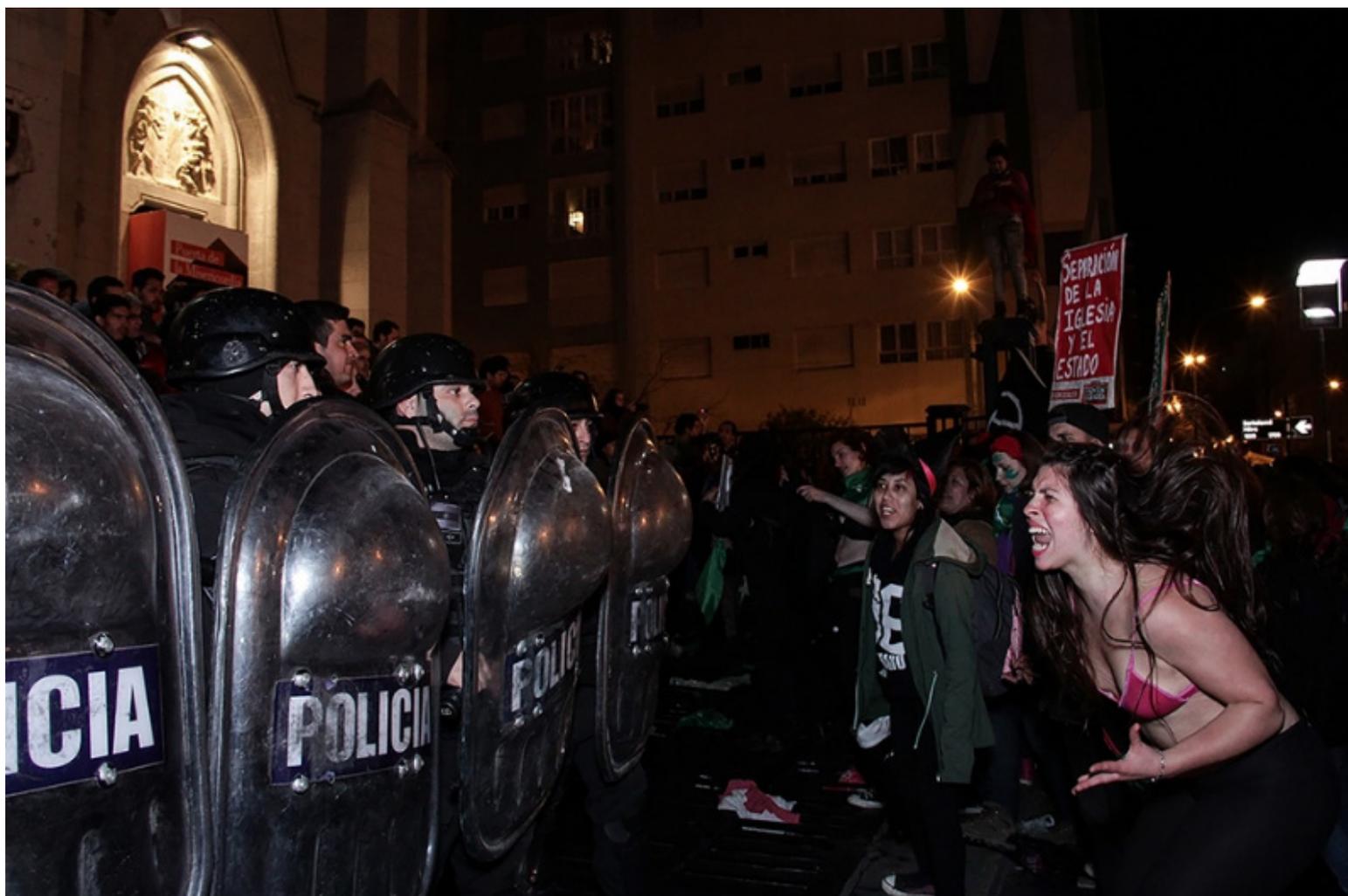
A lo largo de los últimos años los números de violencia machista han mostrado una tendencia creciente. Desde los 208 femicidios, transfemicidios/travesticidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas en 2008 hasta los 298 en 2020 y los 37 femicidios en 31 días de enero de 2021, cada uno de ellos nos duele más y más. 17% de los casos se dieron con existencia de denuncias previas o causas ya judicializadas. Evidentemente, no alcanza con crear un Ministerio, sobre todo si falta el presupuesto necesario para implementar las políticas adecuadas para prevenir, asistir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. ¿Qué agregaría un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios? Mucho ha logrado avanzar la marea verde, forzando finalmente el triunfo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es la perspectiva del materialismo histórico la que podrá llevar al movimiento a señalar las maneras en las que el estado ejerce la opresión, por acción u omisión, y es en las calles donde obtendremos los triunfos.

El femicidio de Úrsula Bahillo a manos del policía Matías Martínez, como tantos otros, se podría haber evitado. Pero los organismos del Estado miran

para otro lado. La policía estuvo involucrada en el 20% de los femicidios del 2019. Suelen asesinar con su arma reglamentaria y gozan de la protección de la institución policial, desoyéndose las denuncias de la víctimas y familiares y hasta alertando a los violentos de las mismas. Recurren a estos mecanismos ya tan conocidos, como en el caso de Luciano Arruga o Facundo Astudillo Castro. Más de 6000 efectivos de la Bonaerense tienen denuncias por violencia de género, impunes bajo el manto protector del ministro Berni.

Martínez tenía numerosas denuncias previas no solo hechas por ella, sino también por otras mujeres y parejas anteriores, pero la máxima medida que se tomó fue la de una perimetral que fue fácilmente violada por el femicida. Sin ir más lejos, hace unos días fue condenado a 4 años de prisión por un caso de violencia de género previo.

Una famosa frase popular dice: "¿qué se puede



esperar de un burro más que una patada?". Este accionar impune de la policía es moneda corriente, y es necesario para mantener a raya a los y las trabajadoras. Este fenómeno no solo se da en nuestro país, podemos hablar del asesinato del malabarista en manos de Carabineros en Chile y los casos de violencia policial racista en EEUU, como algunos ejemplos. El nivel formativo de unos pocos meses de nuestra policía, con una gran carga horaria de práctica de tiro, no hace más que echar leña al fuego. Y así como el movimiento antirracista de EEUU suscitó el debate sobre la abolición de la policía, no estaría de más que nos diéramos ese debate también, si estamos de acuerdo con que es una institución malparida, capaz de formar y sostener en sus filas a asesinos de toda calaña.

## **"Si no vuelvo, quemem todo..."**

Respaldamos y reivindicamos la pueblada de Rojas, que ardió de bronca señalando con justeza a la comisaría local y a la comisaría de la mujer después de que éstas hicieran oídos sordos al pedido desesperado de ayuda y protegieran al femicida. Que la bronca se abra camino. La policía no nos cuida, nos violenta.

La violencia históricamente se agudiza en todas sus aristas en períodos de crisis económica y social como la que estamos atravesando, y las mujeres y diversidades somos dobles víctimas de la misma. La violencia de clase que nos atraviesa tiñe a la violencia machista que se expresa en nuestra

sociedad.

La violencia hacia las mujeres es un problema político, por lo que es el gobierno y el Estado quienes deben dar una respuesta integral al problema. Mientras se sigan votando presupuestos de miseria atados al pago de la deuda y el FMI, a los discursos y a nuestras pibas se los lleva el viento.

Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos. Exigimos el presupuesto necesario para el desarrollo de políticas públicas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Fuera Berni. El Estado y el gobierno son responsables.

**Silvana Ruiz**

**POR LICHITA : TODXS A PLAZA DE MAYO**

**25 DE FEBRERO -17 HS.**

**CONCENTRACIÓN**

**Exigimos Aparición con vida de Lichita  
Justicia por Lilian y María Carmen  
Libertad para Laura y Carmen**

***todas las voces, todos los cantos  
todos los colores, todas las manos***

**#ERAN NIÑAS. APARICIÓN CON VIDA DE LICHITA YA  
SOLIDARIDAD POR LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY**



***¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS  
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!***